

---

## EL MOVIMIENTO Y SUS ETIQUETAS

---

El movimiento que encabeza López Obrador ha sido etiquetado de diversas formas. Una de ellas es la que se ha puesto el propio movimiento y su líder —la de Cuarta Transformación—; otras dos han sido empleadas por críticos y adversarios desde distintos segmentos de la izquierda y la derecha, cuando lo tildan de neoliberal y populista. A continuación analizaremos las tres para entender mejor no sólo las particularidades del movimiento, sino su percepción.

### **La Cuarta Transformación**

Aunque nadie sepa bien a bien su significado, el término *4T* se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano. De hecho, uno de sus primeros logros —aunque pueda parecer un chiste de mal gusto— es su uso generalizado, incluso entre aquellos que en un principio se resistían a emplearlo o se mofaban de él. El hecho de que tanto militantes y simpatizantes como detractores, comentócratas y representantes de partidos de oposición recurran todos los días a ese eslogan no deja de ser un triunfo cultural del movimiento social y político que encabeza López Obrador. No sólo ha sido una prueba de su extraordinaria capacidad para hacernos hablar en sus términos, establecer una agenda, un rumbo y un sentido de propósito. También es una demostración de que en el ánimo social se instaló la idea de que 2018 no sólo representó un antes y un después, sino también que no hay un lugar al que podamos volver.

Aunque la 4T es un eslogan también es un recordatorio de que estamos inmersos en un proceso de cambios y que para una gran parte de la población éstos hoy se perciben como posibles, lo cual no es algo menor. Incluso el historiador Carlos Illades, a pesar de su visión crítica, reconoce el potencial de cambio que emana del actual gobierno y destaca algunas de sus aportaciones. En primer lugar, señala que el triunfo del obradorismo permitió derribar el mito de que México era un país de clase media, para colocar al pueblo y a los desposeídos como el nuevo sujeto de la historia.<sup>1</sup> Podemos pensar, en esa lógica, que los cambios que estamos viviendo efectivamente se orientan hacia una mayor justicia social. Illades señala, también con razón, que la 4T ha tenido una capacidad para definir, en un lenguaje sencillo y persuasivo, a los actores del conflicto social, nombrar a los adversarios y puntualizar los agravios de ese pueblo, con lo que también coincido. Otro elemento clave ha sido el rescate de lo público: la búsqueda por recuperar espacios de gestión estatales delegados a los particulares, y pasar —de forma legal, pacífica y democrática— del Estado mínimo a un Estado que no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social.<sup>2</sup>

¿Dónde está, sin embargo, el núcleo de la 4T? ¿Cuáles son los principales elementos que la definen en el discurso y la práctica? ¿Dónde radica su esencia narrativa? Los cínicos podrían responder que donde quiera el presidente, adonde desee llevarla cada mañana. Otros pensamos, sin embargo, que el fuerte elemento personalista de este movimiento no le resta capacidad ni potencial transformador. Cabría reflexionar si es que los grandes periodos de cambio en la historia —no sólo en México y en América Latina, sino incluso en otros países del mundo— han sido posibles sin un liderazgo fuerte capaz de impulsarlos. Casos distintos probablemente sean excepcionales. Aun en casi toda la política realmente existente hay alguien (delante o atrás) que establece de forma abstracta cuáles son las necesidades más importantes de la gente. Hay alguien que habla y hay quienes son hablados por el que habla. De hecho, la movilización desde arriba —esa que causa tanto escozor a los liberales— no ocurre solamente en el populismo, tema del que hablaré más adelante. La han practicado y la practican fuerzas políticas de todo tipo.

Las definiciones e interpretaciones sobre el sentido de la 4T varían considerablemente. En diciembre de 2018 la revista *Horizontal* se lo preguntó

a varios analistas, cada uno de los cuales ofreció respuestas muy distintas. Algunos partieron de sus propios deseos. Tal fue el caso de la politóloga Denise Dresser, quien quería imaginarse que la 4T sería “una apuesta a la remodelación institucional, a la rendición de cuentas, a los contrapesos, a la transparencia, a la democracia representativa y a la participativa real”.<sup>3</sup>

Otros —los obradoristas religiosos— se refirieron a la 4T como si se tratara de las sagradas escrituras que no parecieran ser otras que las que se presentan en la misa mañanera. Son los que hablan de la Cuarta Transformación e incluso le agregan al eslogan —para repetir hasta la última coma utilizada por el presidente— “de la vida pública en México”. Gibrán Ramírez, por su parte, veía en la 4T “un objetivo revolucionario de transformación de la correlación de fuerzas políticas en México que permita ampliar derechos”,<sup>4</sup> siguiendo ese discurso de Eva Perón que señalaba que allí donde haya una necesidad debe surgir, precisamente, un derecho. Pero ¿será que la 4T tiene una agenda ambiciosa, consistente y suficientemente sólida de ampliación de derechos como para considerar este elemento el centro de su narrativa? Ramírez, al igual que Dresser, hablaba sobre lo que le gustaría que fuera la 4T.

Otras voces trataban de ser más sobrias o más cautas, y antes que hablar de una “revolución” —lo que sólo cabe en términos retóricos— prefirieron centrarse en elementos más aterrizados y específicos. La lingüista y analista política Violeta Vázquez, por ejemplo, acertadamente definió a la 4T como un intento por “separar el poder político respecto del poder económico y, con ello, poner al gobierno al servicio de la gente y no al de las grandes corporaciones”. A éstas podríamos agregar además los grupos de interés que han tenido al Estado mexicano capturado por ciertos privados.<sup>5</sup> Para Blanca Heredia el término “Cuarta Transformación” resumía el “sentido epopéyico de la oferta de gobierno de López Obrador”; una expresión que denota que la transformación en ciernes rebasaría un mero cambio de gobierno y sería más que una simple transición sexenal. El término, en ese sentido, venía a revelar la ambición de situar los fines y los medios del proyecto de gobierno de López Obrador más allá de categorías temporales o políticas convencionales. Era “un permiso de entrada para ubicarse por fuera de lo esperado, lo rutinario y lo comúnmente aceptado”.

Podemos señalar dos grandes elementos que definen a la 4T a partir de sus avances concretos: por un lado, el combate a la corrupción sistémica, entendida en gran medida como la separación del poder económico del poder político; por otro, la inclusión de las mayorías excluidas y la tentativa de gobernar más allá de las minorías que han tenido cautivo al Estado, lo que en términos prácticos se traduce en esa frase —simple, pero potente— que ha acompañado a López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Sin embargo, no necesariamente distingue a la 4T la lucha contra la desigualdad y probablemente tampoco la defensa de la democracia, “entendida en clave fundamentalmente expresiva y participativa”,<sup>6</sup> como en su momento apuntaron algunos, pues si bien el objetivo de gobernar para las mayorías tiene un poderoso trasfondo democrático, no se alcanza a divisar una agenda orientada al fortalecimiento de las instituciones de la democracia representativa en los cánones liberales, y tampoco parece que este gobierno tome realmente en serio la democracia participativa, a juzgar por la forma en que ésta se ha empleado en la práctica.

### **La etiqueta *neoliberal***

Tanto en el ámbito de la izquierda marxista y zapatista como de la autoproclamada “izquierda democrática” se escuchan críticas a la 4T por su presunto carácter neoliberal.<sup>7</sup> Cuando AMLO estaba por tomar posesión, analistas de izquierda ya planteaban que no estaba en juego un cambio del modelo económico ni una ruta distinta a la del Consenso de Washington.<sup>8</sup> El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) expresaron: “No tenemos duda de que esta nueva etapa de gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración forzada de nuestro país a la órbita imperial de Estados Unidos, pues se ha comprometido fielmente a dar continuidad a las políticas macroeconómicas de los gobiernos anteriores”.<sup>9</sup> También Massimo Mondonesi, un intelectual gramsciano cercano a los sectores de izquierda en la 4T, señalaba a principios de 2019: “Respecto de los gobiernos progresistas

latinoamericanos de las últimas décadas, el horizonte programático de AMLO está dos pasos atrás en términos de ambiciones ‘antineoliberales’”.<sup>10</sup>

Lo realmente paradójico es que también desde la derecha algunos de los más conspicuos defensores de políticas neoliberales hoy descalifiquen a López Obrador con un epíteto similar.<sup>11</sup> En realidad, si uno examina con cuidado el curso de las políticas públicas durante los dos primeros años de la administración obradorista podrá encontrar que, al igual que ha ocurrido con otros gobiernos de izquierda y centro-izquierda en América Latina —desde Brasil hasta Bolivia, pasando por Uruguay o Ecuador—, se percibe una mezcolanza entre elementos de continuidad y cambio, y que si bien en la mayoría de los casos se ha buscado cuidar el balance macroeconómico, se ha procurado también recuperar el papel del Estado en la economía, restar centralidad al mercado y adoptar una visión distinta de lo social.<sup>12</sup>

En el discurso preelectoral de López Obrador se pueden encontrar pasajes en los que habla de la necesidad de un modelo de desarrollo alejado del neoliberalismo. El principal elemento que así lo apunta tiene que ver con recuperar el papel del Estado. En su libro de campaña, *2018: la salida*, AMLO planteaba, por ejemplo: “Hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse en beneficio de las fuerzas del mercado. El Estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social”.<sup>13</sup> Pero AMLO iba más allá. También planteaba en esa obra que, si bien su gobierno cuidaría las variables macroeconómicas, “a diferencia de lo que han venido postulando y haciendo los tecnócratas del neoliberalismo”, no apostaría exclusivamente por una adecuada política monetaria de control de la inflación y de disciplina fiscal, sino también del crecimiento económico y la promoción del desarrollo, lo que cuando menos implicaba relativizar el peso de uno de los grandes dogmas del consenso neoliberal.<sup>14</sup>

A pesar de lo anterior, durante la campaña electoral el candidato estableció un compromiso bastante firme con algunos de los pilares de aquel consenso. A imagen y semejanza (casi una copia) de la “Carta al pueblo brasileño”, con la que Lula da Silva estableció en 2002 una serie de compromisos frente a los mercados financieros, López Obrador publicó en abril de 2018 su “Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros”, en la que se comprometió a respetar al menos tres imperativos de una política económica

típicamente conservadores: en primer lugar, la independencia del Banco de México, lo cual implicaba aceptar que un equipo de técnicos independientes subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de estabilización. En segundo lugar, la disciplina y el equilibrio fiscal, con lo que anticipaba la renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico; promesa que, frente a la crisis económica, sanitaria y fiscal provocada por el COVID-19, ha resultado una camisa de fuerza que posiblemente terminará por impedir el cumplimiento de varias metas planteadas en su programa de gobierno. En tercer lugar, se avalaba la ortodoxia de la política monetaria, al plantear el objetivo de respetar las “metas inflacionarias”, lo que comúnmente se ha hecho mediante altas tasas de interés.<sup>15</sup>

Ya en el poder, sin embargo, el nuevo presidente vino a complicar las cosas, cuando en marzo de 2019, al presentar el Plan Nacional de Desarrollo, anunció que la “pesadilla neoliberal” se había terminado en México y llegó a hacer una afirmación temeraria: “Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal”. El presidente no estableció qué modelo habría de sustituir al anterior, sólo dijo que estaba en proceso: “Tenemos la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales”.<sup>16</sup> ¿Y qué quiere decir eso de “posneoliberal”? Alain Rouquié lo entiende como una forma de pragmatismo. Para él, AMLO es posneoliberal porque no tiene otra opción que ser neoliberal. “Ser posneoliberal —explica— es aceptar algunas cosas que no puede cambiar y cambiar las que puede; es una forma de realismo político.”<sup>17</sup>

Podríamos entonces ver al posneoliberalismo como una etapa intermedia donde, antes que analizar las cosas en blanco y negro, lo que resulta de mayor utilidad es identificar eso que Álvaro García Linera denomina el “movimiento real” que se desarrolla ante nuestros ojos. Y ese movimiento no puede ser otra cosa que una combinación entre continuidad y cambio. Ahora ¿lo que hay es más continuidad o más cambio? En su crítica a la 4T, Carlos Illades asegura que prevalece lo primero. Para él no representa una ruptura con el modelo neoliberal, salvo por el uso que se da a los recursos públicos generados a partir del ahorro, los cuales básicamente se emplean en

el rescate de un sector energético —abandonado por décadas—, así como en financiar programas sociales. Fuera de eso, sin embargo, su visión es que prevalece la continuidad, en cuanto se mantiene el referente de la reducción del gasto público propio del modelo neoliberal, junto con los impuestos bajos, el libre comercio y el neoextractivismo en la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, sostiene Illades con razón, el modelo económico de la 4T sigue en gran medida atado a la globalización neoliberal. Ese modelo ciertamente recupera las políticas desarrollistas de antaño —tales como la inversión pública en infraestructura y otros sectores estratégicos—, aunque lo hace en un contexto radicalmente distinto. Uno que no es el de una economía cerrada, como la que tuvimos hace medio siglo, sino de las más abiertas del mundo.

En honor a la verdad hay que decir que pocos gobiernos de la llamada “ola rosa” en América Latina han logrado —a pesar de su retórica— abandonar tajantemente las políticas económicas neoliberales. En casi todos los casos se vieron obligados a mantener algunos de los pilares del neoliberalismo porque su margen de maniobra era limitado. Tal fue el caso del gobierno de Lula da Silva y más tarde de Dilma Rousseff, en Brasil, donde vimos una combinación entre políticas que seguían la pauta del Consenso de Washington y otras de corte “neodesarrollista”, donde el Estado adquirió un rol más importante en la actividad económica y la política social. Ejemplos similares pueden encontrarse en Ecuador, Bolivia o Argentina, aunque algunos de estos países se apartaron más que otros de las recetas neoliberales.

La continuidad o ruptura ante las políticas económicas neoliberales no son simples elecciones ideológicas que un gobierno adopte a partir de sus propios deseos, simpatías, filias o fobias. Evidentemente, el presidente López Obrador lo sabe, a pesar de que emplee el término *neoliberal* como un calificativo ante casi todo lo que no le gusta. En uno de sus artículos publicados, el exsecretario Carlos Urzúa advertía que, estrictamente hablando, la gran mayoría de las economías del mundo es hoy neoliberal. En esa lista, señalaba, la mexicana sobresale porque en pocos países se han adoptado tantas políticas que previenen la intervención pública en los mercados. Esto, señala Urzúa, “no fue solamente la norma en el caso de nuestros gobiernos anteriores, sino también lo es en la actual administración”.<sup>18</sup>

Por neoliberalismo se entiende, entre otras cosas, una teoría económica y política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales, pero también una confianza en el libre mercado a partir de la creencia de que éste puede asignar los recursos de forma más eficiente. La 4T no parece encuadrarse en esa visión en la medida en que su discurso plantea recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo. Al menos en dos rubros muy concretos esto se ha materializado a través de políticas que buscan reafirmar la conducción del Estado en sectores estratégicos: el energético y el alimentario. En el primero de forma cada vez más clara: primero a través de una política de seguridad, autosuficiencia y soberanía energética que se ha traducido en la tentativa de rescatar a Pemex como generador de una oferta de combustibles segura, así como en la suspensión de las subastas de contratos para la exploración y explotación del petróleo y gas; más recientemente, en la iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que pretende priorizar el sector público sobre el capital privado internacional y darle más centralidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el segundo ámbito, se busca reafirmar la presencia del Estado por medio de una estrategia para alcanzar la soberanía alimentaria a través de medidas como los precios de garantía para alimentos básicos, en las que se busca beneficiar a dos millones de pequeños productores y por medio de la creación de un organismo público descentralizado, Segalmex. Incluso los apoyos directos a un millón de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios por medio del programa Producción para el Bienestar abona en esa dirección.<sup>19</sup>

Algunos analistas consideran que la política de austeridad, los despidos en el sector público y los recortes presupuestales impulsados por López Obrador lo hacen un gobernante “neoliberal” porque a través de ese tipo de medidas estaría buscando “adelgazar al Estado” en una lógica similar a la de los republicanos en Estados Unidos. Tales afirmaciones tienden a ser inexactas y parecieran encerrar una trampa para confundir a la izquierda con el falso argumento de que López Obrador es un líder anti-Estado y pro mercado. Viniendo de quienes han sido grandes defensores de las privatizaciones y se oponen abiertamente a proyectos de infraestructura pública, críticas como éstas no dejan de encerrar una paradoja.

No se puede negar que, a lo largo de sus primeros años en el gobierno,



AMLO ha mermado presupuestal y organizacionalmente muchas funciones, capacidades y atribuciones del sector público. Sin embargo, su lógica no ha sido la de transferir mayormente esas responsabilidades al sector privado. En todo caso, ha descansado fuertemente en las Fuerzas Armadas o en estructuras paralelas a la Administración Pública Federal como la de los llamados servidores de la nación.

Pero hay más. Contra lo que algunos afirman, la práctica obradorista tiene muy poco que ver con la visión del *small government* de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, en cuanto aquél buscaba reducir el aparato público para otorgárselo al libre mercado. Es obvio que ése no es el objetivo de López Obrador. Motivado por una promesa de no aumentar impuestos (ésta sí asimilable a una política neoliberal), lo que ha hecho este presidente es una reforma administrativa para recortar gastos superfluos y burocracias innecesarias. López Obrador sí quiere un Estado interventor, pero más eficiente, que no incurra en el dispendio y, sobre todo, que no esté capturado por grupos de interés que desvíen el presupuesto público hacia objetivos alejados del interés público. Lejos se sitúa esa postura de los intereses conservadores que buscan un Estado pequeño, limitado a vigilar la seguridad y la defensa de la propiedad privada y dedicado a preservar el *statu quo*.

El neoliberalismo también tiene que ver con una forma de concebir las relaciones entre el Estado y la sociedad, donde se tiende a pensar en los individuos más que en la colectividad. Recordemos cómo Margaret Thatcher llegó a asegurar en una entrevista: “¿Quién es la sociedad? No existe tal cosa, tan sólo individuos, hombres y mujeres”. Semejante visión está en las antípodas del pensamiento obradorista. Como bien lo recordaba Blanca Heredia, los actores clave bajo este gobierno no son realmente los individuos y sus libertades, como lo serían para un neoliberal de manual, sino los grupos menos aventajados social y económicamente. Los protagonistas, para bien o para mal, son colectivos como la familia, la Iglesia y el Ejército, tres instituciones que en la visión del presidente son fundamentales para la recuperación del orden social, político y moral de un país roto, precisamente por casi cuatro décadas de neoliberalismo.<sup>20</sup>

Probablemente aún sea pronto para saber si podemos situar esta administración mayoritariamente en el terreno de la continuidad neoliberal o

en un estadio claramente diferenciado. La respuesta a ello no sólo está en la retórica presidencial o en las definiciones ideológicas, sino en las acciones concretas que únicamente con el tiempo podremos sopesar, cuando se revisen a detalle las políticas de este gobierno. Incluso cuando se conozcan una a una las letras pequeñas de los contratos a través de los cuales se perfilarán los grandes proyectos de esta administración y podamos tener una noción más clara sobre los espacios que habrán de permanecer en la órbita estatal y cuáles en la del mercado. Hay, sin embargo, otros elementos de la agenda neoliberal que vale la pena revisar con más detalle, como se hace en la siguiente sección.

### ***Pilares del Consenso de Washington***

En 1989 el economista John Williamson estableció un conjunto de 10 elementos que habrían de conformar lo que se dio en llamar el “Consenso de Washington”, que suelen ser considerados como la base del pensamiento neoliberal y que fueron compartidos por las principales instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Tesoro norteamericano y la Reserva Federal. En un interesante ensayo, Luis Ignacio Román los recupera y analiza de forma sistemática para terminar por demostrar que el actual gobierno actúa en concordancia con la mayor parte de ellos, a pesar de que enfrenta a algunos en una serie de aspectos críticos.<sup>21</sup>

En la tabla 1 podemos ver los diez rubros del Consenso de Washington y qué ha ocurrido con cada uno de ellos bajo la 4T. Cada caso se explica más adelante de acuerdo con el análisis de Román.

1. *Disciplina fiscal.* En este ámbito, la posición de López Obrador fue desde un principio coherente con el primer mandamiento: no gastar más de lo que ingresa. Su administración ha asumido una política extremadamente conservadora que no le pide nada a los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña, y parecería ir aún más lejos, como se observa en su renuencia a utilizar el déficit público y la deuda como instrumentos de política económica.<sup>22</sup> Ni siquiera en tiempos de pandemia el gobierno aceptó flexibilizar

Tabla 1. El Consenso de Washington bajo el gobierno de la 4T

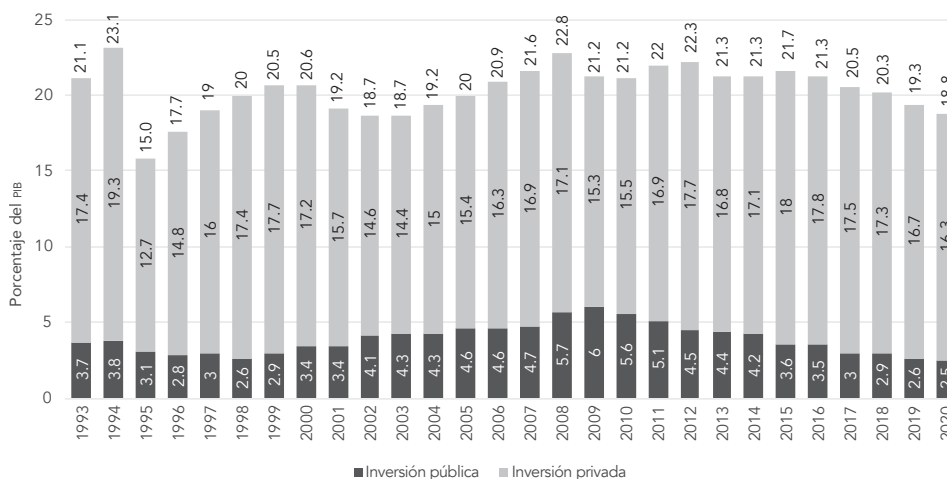
	CONTINUIDAD	CAMBIOS	NO AVANZA NI SE REVIERTE
1. Disciplina fiscal	✓		
2. Reorientación del gasto		✓	
3. Política fiscal a favor de impuestos indirectos			✓
4. Liberalización financiera	✓		
5. Libre paridad cambiaria	✓		
6. Libre comercio	✓		
7. Facilidad a la inversión extranjera		✓	
8. Privatizaciones			✓
9. Desregulaciones			✓
10. Derechos de propiedad			✓

El gobierno obradorista ha oscilado entre dar continuidad a las políticas neoliberales, revertirlas, responder a ellas de manera híbrida o simplemente no atenderlas.

la disciplina fiscal, a pesar de que el consenso internacional y las recomendaciones de diversos organismos apuntaban a la necesidad de brindar apoyos significativos al sector productivo y, de ser necesario, incluso abandonar las reglas del equilibrio presupuestal. Sin embargo, en realidad esta política económica contrasta con las anteriores en la medida en que el abuso en el endeudamiento en aquellas administraciones fue utilizado para proteger los intereses privados de unos cuantos.

2. *Reorientación del gasto y la inversión pública en función de su rentabilidad económica y social.* Aquí hay continuidad en dos rubros importantes. Por un lado, en la tendencia a reducir la inversión pública como proporción del PIB, como se observa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Inversión pública y privada en México



En esta gráfica (elaborada a partir de datos de Leonardo Curzio y Anibal Gutiérrez y del INEGI) se muestra la inversión pública y privada en nuestro país como porcentaje del producto interno bruto en el periodo que va de 1993 (Carlos Salinas de Gortari) a 2020 (Andrés Manuel López Obrador). Como se puede ver, después de un pico en 2009, la inversión pública ha ido constantemente a la baja. En los dos primeros años del gobierno obradorista llegó a niveles por debajo de los tres sexenios anteriores; sólo puede compararse con dos años del periodo zedillista golpeados por la crisis.

Por otro lado, la continuidad neoliberal se observa en la medida en que se plantea que algunos de los grandes proyectos de infraestructura de esta administración (Tren Maya, Corredor Transísmico o Tren México-Toluca) se desarrollen mayoritariamente con financiamiento privado.<sup>23</sup> Sin embargo, la

ruptura está en que este gobierno ha apostado por una política energética, en la que la generación de infraestructura petrolera y eléctrica descansa fundamentalmente en la inversión pública y parece orientarse a desterrar la inversión privada de esos sectores (al menos si la reforma legal que este gobierno se propone al momento de escribir estas páginas no es finalmente frenada en la Suprema Corte por entrar en contradicción con la Constitución y ciertos tratados internacionales).

En lo que respecta al aspecto del gasto público que, según el Consenso, debe traducirse en una política social focalizada, hay pasos hacia el alejamiento. La visión de este gobierno contrasta con la típica política social neoliberal que antes que dirigirse a la sociedad en su conjunto se limita a ciertos individuos que se consideran responsables de su condición de pobres. Bajo ese enfoque, la solución pasa de “invertir” en la persona que, según esa concepción, tiene un “problema”, a darle “oportunidades”. En esa lógica se piensa que no debe darse ningún apoyo a quien no lo necesita (para así evitar otorgarle un “estímulo perverso antiproductivo”), sino transferirlo a quien ciertos técnicos creen que las precisa. Como explico a detalle en el capítulo 8, la 4T se aparta ideológicamente de esta visión, al plantear un enfoque de derechos universales.

3. *Política fiscal orientada a los impuestos indirectos.* Este principio implica favorecer la captación proveniente del consumo (impuesto al valor agregado —IVA— y otros impuestos sobre la producción y servicios), antes que del ingreso. El obradorismo no ha adoptado una política semejante, aunque ha sido renuente a avanzar hacia una reforma fiscal. La continuidad en la política tributaria está en la decisión de reducir el IVA en la frontera norte de 16 a 8 por ciento, y del impuesto sobre la renta (ISR) de 30 a 20 por ciento. Pensar que medidas como éstas promueven las inversiones, la creación de empleos y el crecimiento económico es típicamente neoliberal. Hay continuidad también, como ya se ha dicho, en la resistencia a incrementar impuestos, particularmente entre quienes perciben más ingresos. Hay que decir, sin embargo, que el gobierno ha buscado compensar esto por medio de un decidido combate a la evasión, la reducción de créditos y exoneraciones fiscales, y el hecho de que los grandes contribuyentes han comenzado a regularizar sus deudas fiscales.

4. *Liberalización financiera.* En este rubro, el gobierno simplemente ha mantenido el *statu quo*, como sostiene Román. Salvo una iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, la 4T no ha adoptado medidas a ese respecto. Hay continuidad neoliberal porque el gobierno ha establecido una política de fuerte acercamiento al sector financiero, particularmente el bancario, al plantear vías para incrementar las transacciones digitales y reducir el uso del dinero en efectivo, como ocurrió durante la Convención Nacional Bancaria de marzo de 2019. El primer mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones su respeto a otro de los grandes dogmas: la autonomía del Banco de México, pilar fundamental del monetarismo promovido por Milton Friedman. Su defensa en este terreno destaca aún más si la contrastamos con su opinión general frente a cualquier otro organismo autónomo, como hablaremos más adelante.

5. *Libre flotación del peso.* Aquí no hay mucho que decir salvo que la paridad cambiaria sigue siendo determinada por el mercado, y la oferta de divisas todavía la establece de forma autónoma el banco central.

6. *Liberalización comercial.* Los acuerdos de libre comercio e inversión, junto con la reducción de aranceles, han sido uno de los pilares del régimen neoliberal. Con sus más de 40 acuerdos comerciales firmados, la economía mexicana es una de las más abiertas del mundo. El empeño que López Obrador y su equipo pusieron en la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), antes de llegar al gobierno, son evidencia de un compromiso con esta agenda; aun más, se vio un cambio significativo en la postura del hoy presidente, quien en la década de 1990 fue siempre contrario a la apertura comercial<sup>24</sup> y todavía en 2006 anunciaba su intención de revisar el tratado. Paradójicamente, los aspectos antiliberalizadores que llevaron a sustituir el viejo Tratado de Libre Comercio (TLC) por un nuevo acuerdo comercial han surgido por interés de Estados Unidos, quien bajo la presidencia de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas a ese país, especialmente en el sector automotor y agrícola. Ciertamente, la postura de López Obrador en este ámbito ha sido sensata. Con una economía tan dependiente del sector externo en general, y de los Estados Unidos en particular, ir en contra del libre comercio podría ser suicida.

7. *Facilitación de la inversión extranjera directa.* Aquí hay ambigüedad entre continuidad y cambio. El gobierno tiene un discurso a favor de la inversión, pero en los hechos ha demostrado su renuencia a mantener las condiciones en que ésta se dio en el pasado, e incluso el tipo de privilegios que se concedieron a inversionistas. Esa actitud quedó muy clara durante la transición y los primeros meses de gobierno, cuando frenó o revisó algunas de las iniciativas más importantes de la administración anterior, desde el aeropuerto de Texcoco hasta las subastas petroleras, pasando por los contratos de gasoductos, las zonas económicas especiales (ZEE) y el muy criticado caso de la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali.

En diversas ocasiones el presidente ha criticado también las concesiones fiscales a ciertos grupos, y no parece dispuesto a promover políticas de flexibilización laboral como vía para atraer inversiones; incluso se ha comprometido con una política laboral de sindicalismo independiente, combate a la tercerización y expansión del salario mínimo. Este gobierno podría limitar las ventajas que en el pasado se otorgaron a ciertos corporativos transnacionales, como ha ocurrido ya en el caso de Iberdrola, empresa energética española con la que el gobierno de López Obrador ha entrado en conflicto al denunciar supuestos abusos en los precios de la venta de gas natural a la CFE.<sup>25</sup> En suma, la 4T parece interesada en promover la inversión extranjera, pero no necesariamente otorgarle el mismo tipo de facilidades que en el pasado, como asegura también Román.

8. *Privatización de bienes y servicios públicos;* 9. *desregulación;* 10. *garantía de los derechos de propiedad.* En realidad en estos tres rubros las cosas se quedan como están. No avanzan esas agendas, pero tampoco se busca revertir lo hecho en las últimas cuatro décadas, salvo en el terreno energético. A pesar de que México es uno de los países en los que ha habido más privatizaciones, la 4T no se plantea otras nuevas, pero tampoco tiene un programa de nacionalizaciones o estatizaciones como ha ocurrido en otros países latinoamericanos gobernados por la izquierda. Este gobierno tampoco ha promovido nuevos procesos de desregulación, aunque no busca revertir los existentes; no se han planteado ni se vislumbran cambios en cuanto a los derechos de propiedad, como revertir la desaparición del ejido que tuvo lugar durante el salinismo, como la izquierda llegó a considerar en otras épocas.

Se puede ver que el gobierno de López Obrador no representa “más de lo mismo”, pero tampoco un cambio radical en materia de política económica. Cuando uno revisa instrumentos concretos, como los paquetes económicos presentados al Congreso para 2020, se pueden encontrar, en la lógica descrita en este capítulo, una combinación entre continuidad y cambio. Tanto el Presupuesto de Egresos como los Criterios Generales de Política Económica aprobados por la 4T han sido “neoliberales” en la medida en que gran parte de su diseño está pensada para atender las preocupaciones de los mercados. Esto se expresa, por ejemplo, en la disciplina macroeconómica, en las metas de superávit fiscal o incluso en la muy baja inversión pública, como ya se mencionó. En estos elementos, el presupuesto bien podría ser considerado “responsable” desde una óptica neoliberal.

Quizás el principal rubro en el que los presupuestos de la 4T se apartan del neoliberalismo está en el énfasis en el área social, así como en la prioridad otorgada a ciertas empresas estatales. De forma muy genérica podría decirse que los presupuestos no han sido “neoliberales” en la medida en que han procurado atender a los olvidados. Porque se han orientado más recursos a programas sociales que en los últimos años, a pesar de estar lejos de ser los suficientes. Suspendidas las rondas, en el presupuesto destinado a la energía también puede advertirse una discontinuidad. El gasto público destinado al Ramo 23 (energía) para 2020, por ejemplo, aumentó 19.8 por ciento respecto de 2019 y se mantuvo prácticamente igual para 2021 (principalmente por el incremento en los subsidios a las tarifas eléctricas), mientras que a la Secretaría de Energía (Sener) se destinó un presupuesto casi 70 por ciento más alto en 2020, en gran medida para la construcción de Dos Bocas (un proyecto que, a pesar de polémico, difícilmente podría considerarse “neoliberal”).

Ciertamente, el gobierno actual se ha alejado de la aplicación de ciertas recetas y modelos aplicados a rajatabla. En esa lógica, asume que el mercado tiene fallas y que el Estado debe desempeñar un papel más activo para subsanarlas. De ahí que se orienten recursos hacia una política de seguridad y soberanía alimentaria, como ya se mencionó. Otro elemento de discontinuidad neoliberal tiene que ver, como ya se ha señalado, con el hecho de haber descongelado los aumentos al salario mínimo. No hay que olvidar



que —so pretexto de sus efectos inflacionarios— la política neoliberal limitó severamente este tipo de aumentos. El objetivo de atender el sur del país a través de grandes proyectos de infraestructura e inversión que permitan cerrar las brechas regionales que el neoliberalismo contribuyó a ampliar es otro ámbito donde vemos cambios.

Aun con todos estos elementos, el presupuesto apenas tiene un carácter moderadamente redistributivo. Y digo moderadamente porque el presidente decidió —al menos hasta la mitad de su mandato— renunciar a una reforma fiscal que podría permitir una reducción más significativa de las desigualdades y, en última instancia, asumir una política fiscal capaz de generar una ruptura con el neoliberalismo. Lo que sí se ha visto en los sucesivos paquetes económicos es un esfuerzo valioso —aunque probablemente insuficiente— de incrementar la recaudación.

### **El populismo de AMLO**

Otra etiqueta usada de manera simplista por varios comentócratas para caracterizar al gobierno de López Obrador es el término *populismo*. No obstante, el concepto suele emplearse desde el prejuicio o la mera holgazanería intelectual. En varios países, desde empresarios hasta políticos, periodistas e intelectuales han recurrido a la diatriba antipopulista para caracterizar fenómenos muy distintos entre sí. De unos años para acá, populista se ha vuelto todo aquello que atente contra el *statu quo*; que se aparte aunque sea mínimamente del dogma de la globalización neoliberal y no tenga como referente fundamental los principios de la democracia liberal. *Populismo* es también, muy frecuentemente, todo lo que nuestras élites no consiguen entender.

El vocablo tiene significados tan diversos desde que entró en el lenguaje político que varios autores han terminado por distanciarse de él y considerarlo un concepto vacío que únicamente funciona para denostar a los adversarios.<sup>26</sup> En el lenguaje de ciertos formadores de opinión que asumen de forma acrítica los dogmas neoliberales, *populista* es todo el que defiende un Estado interventor —cualquiera que éste sea—, que brinda asistencia, controla ciertas empresas, ejerce la dirección de servicios públicos, otorga

subsidios o provoca cualquier tipo de lo que ellos llaman “distorsión” en el mercado. Para algunos, *populistas* son también aquellos gobiernos que optan por mantener, o bien recuperar, el control estratégico de sus recursos naturales. Esta visión, a veces sumamente tramposa, se refuerza en el hecho de que el populismo ha sido históricamente condenado tanto por la derecha como por un sector de la izquierda y es un fenómeno hostil para buena parte de los intelectuales.

Ideologías de la más diversa índole —desde el comunismo hasta el fascismo— han sido etiquetadas así. En México se ha llamado populistas a gobernantes y líderes tan diferentes entre sí como Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador; en Sudamérica a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Néstor Kirchner, pero también —en el espectro opuesto— Álvaro Uribe, Joaquín Lavín, Álvaro Novoa, Carlos Menem, Alberto Fujimori y Fernando Collor de Mello. Según ciertas visiones, populista fue Salvador Allende y también el marxista Fidel Castro; para algunos, también lo fue Lula da Silva.<sup>27</sup>

Es tan escaso, pues, el consenso que existe en torno al concepto de populismo, y tanta la leyenda negra alrededor de él, que por momentos se antoja abandonar el término por completo y buscar otros más precisos para explicar los distintos fenómenos políticos que tienen al pueblo —o a los líderes que lo interpelan— como protagonista. Sin embargo, estoy convencido de que merece un desagravio, siempre que se distinga entre un populismo de izquierdas, democrático, incluyente y que busca incorporar a las clases marginadas en la actividad política para ejercer una cierta redistribución de los bienes públicos, de ese populismo de derechas, excluyente, que explota los sentimientos más pedestres de las clases medias o de los sectores pudientes para promover el racismo y la discriminación, como ocurre con Marine Le Pen, Donald Trump o Jair Bolsonaro.

En la lógica de la politóloga Chantal Mouffe, un populismo de izquierdas es una estrategia discursiva donde se establece una frontera entre el pueblo y la oligarquía;<sup>28</sup> es una forma de populismo que busca “recuperar la democracia con el fin de profundizarla y ampliarla” y se plantea el “unificar las demandas democráticas en una voluntad colectiva para construir

un ‘nosotros’, un ‘pueblo’ capaz de enfrentar a un adversario común: la oligarquía”.<sup>29</sup> Una lectura igualmente generosa es la del sociólogo argentino Ernesto Laclau, para quien el fenómeno emerge cuando el discurso dominante entra en crisis y pierde su capacidad para absorber las demandas democráticas de la sociedad. En su libro *La razón populista*, lo define como una estrategia discursiva de construcción de una frontera que divide a la sociedad en dos campos y convoca a la movilización de “los de abajo” contra “aquellos en el poder”.<sup>30</sup>

El populismo, en ese sentido, no es otra cosa que un modo particular de articular y gestionar un cúmulo de demandas y reivindicaciones que el sistema político no puede atender o es renuente a hacerlo. Y dado que esas demandas son sumamente heterogéneas, establece entre ellas una relación de solidaridad que las homogeneiza en un conjunto más simple y que un líder enarbola ante las masas frustradas por fuera del sistema vigente y contra él.<sup>31</sup>

### ***Perspectiva histórica***

Muy poco tienen que ver los populismos que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX —en Rusia primero y en Estados Unidos después— con el populismo latinoamericano que emergió esencialmente entre los sectores urbanos durante los años treinta y cuarenta de la pasada centuria. Los fenómenos de masas que tuvieron como protagonista a la clase obrera en nuestra región (también llamados movimientos “nacional-populares”), y abarcaron desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, fueron la consecuencia histórica de un acelerado proceso de modernización y un creciente grado de movilización social que rebasó la capacidad de los mecanismos de integración de las instituciones democráticas.

Los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, José María Velasco en Ecuador, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, Rómulo Betancourt en Venezuela y —no menos importante— Lázaro Cárdenas en México, entre otros, transformaron “dramáticamente” las estructuras sociales y sirvieron para la consolidación de Estados más fuertes. En varios casos, estos gobiernos también desafiaron la gran dependencia de nuestras

economías frente al capital extranjero, al llevar a manos del poder público el dominio de bienes estratégicos como los ferrocarriles o el petróleo.<sup>32</sup>

Hay gran cantidad de datos duros que demuestran cómo gobiernos populistas del tipo de Juan Domingo Perón y Lázaro Cárdenas —más allá de todas las críticas— instrumentaron políticas que se tradujeron en el mejoramiento económico, social y cultural de sus pueblos. “En México, entre la segunda mitad de 1935 y principios de 1938, cuando el programa cardenista pudo desarrollarse plenamente, la reforma agraria logró transformar la geografía social y política de una forma que no tuvo precedentes, lo que generó una redistribución de la riqueza nacional. Cárdenas alteró radicalmente la estructura de la propiedad rural con la expropiación de casi 18 millones de hectáreas, en su mayoría tierras cultivadas, que se tradujeron en un aumento de 400 por ciento de la superficie agrícola.”<sup>33</sup> Las expropiaciones dejaron en manos de los ejidatarios zonas tan productivas como la algodонера de La Laguna, en el norte, las plantaciones de henequén, en el sur, o las tierras de regadío del valle del Yaqui, en el noroeste. Si en 1930 las propiedades ejidales sólo constituían 13 por ciento de las tierras cultivables de México, hacia 1940 este porcentaje ascendía a 47 por ciento. Así, para finales de los cuarenta, la mitad de la población rural tenía acceso a tierras, ya fuesen ejidales o privadas. En 1940 los ejidatarios poseían alrededor de siete millones de hectáreas cultivadas, mientras que los propietarios privados sólo 6.8 millones.<sup>34</sup>

Intelectuales de muy diversas tendencias han señalado el carácter trascendental y reformador de la gestión cardenista. Alan Knight asegura que “el cardenismo fue un movimiento radical genuino” que “buscó reformar una sociedad caracterizada por un capitalismo dependiente”.<sup>35</sup> Arnaldo Córdova, a pesar de ser un duro crítico de la política de masas de esos años, señala: “El desarrollo de la reforma agraria durante el sexenio cardenista es impresionante si se consideran los beneficios obtenidos por los campesinos. Tanto en lo referente a la calidad de las tierras que recibieron como en lo tocante a la asistencia que se les prestó, la obra de Cárdenas constituye todo un récord”.<sup>36</sup>

En Argentina, por su parte, durante el gobierno del general Perón el país alcanzó la distribución de la riqueza más equitativa que conozca su historia. Por años, ése fue uno de los países socialmente más armónicos de

Latinoamérica, con el menor índice de analfabetismo de la región, una poderosa clase media, la mayoría de la población concentrada en las ciudades, una notable excelencia educativa y una participación de los trabajadores en el PIB, que durante el primer peronismo alcanzó picos de 50 por ciento, en una tendencia que logró mantenerse por encima de 40 por ciento hasta 1976, cuando se produjo el último golpe militar. El país creció como nunca antes. Según el censo de 1954, el número de establecimientos industriales y mineros se había incrementado en 110 por ciento y el personal fabril ocupado en 25.6 por ciento en relación con 1946. Por 650 millones de dólares fue totalmente repatriada la deuda externa. “Estos guarismos —como escribió Juan José Hernández Arregui en su famosa obra *La formación de la conciencia nacional*— expresan una prosperidad desconocida hasta entonces que abarcó y benefició a todas las clases sociales.”<sup>37</sup>

En suma, el populismo en América Latina debe mirarse con los ojos de nuestra propia historia, a la luz de una región históricamente desigual —la más desigual del mundo— y débil (cuando no frágil) en lo institucional y en lo democrático. Sus formas autoritarias y la preeminencia de caudillos son —nos guste o no— una parte innegable de nuestra cultura política. Desde tiempos remotos, el pueblo se identifica con esas figuras y se moviliza en torno a ellas. Son estas formaciones políticas —y no otras— las que hasta ahora han sido capaces de construir una hegemonía de izquierda en términos gramscianos.

En nuestra región, el populismo fue una contribución indiscutible. A pesar de sus posiciones liberales y muy contrarias al populismo, en un suplemento especial *The Economist* afirmaba con razón: “[El populismo en América Latina] fue el medio a través del cual las clases trabajadoras y los sectores medios fueron incorporados al sistema político. En Europa esa labor la llevaron a cabo los partidos socialdemócratas. En América Latina, sin embargo, donde los sindicatos eran organizaciones muy débiles, esa labor la concretaron líderes populistas”.<sup>38</sup>

Sólo hace falta echar un vistazo a los partidos y gobiernos bien o mal llamados socialdemócratas —tan admirados por la llamada “izquierda democrática”— que lograron gobernar en América Latina durante el siglo XX para darse cuenta de que su impacto social fue insignificante al lado de los

grandes movimientos nacional-populares. Más pobre aún fue el alcance de los partidos comunistas —algunos de ellos proscritos y otros imposibilitados de participar en elecciones—, de escasa base social, que eran secciones nacionales o apéndices del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética y que muy tarde lograron extirpar su sectarismo o sus raíces estalinistas para formar alianzas más amplias. La ceguera de esa izquierda vernácula para comprender el acceso de las grandes masas populares al escenario de la política local, y para aceptar su carácter progresista, los llevó a automarginarse de las grandes transformaciones históricas.

El rechazo al populismo en América Latina fue tan grande como los intereses que afectó, ya fuera de forma real o simbólica. El populismo clásico trajo consigo la irrupción de quienes eran y siguen siendo considerados como la “chusma”, “los nacos”, “los rotos”, “los descamisados” y los “cabecitas negras”, y los puso en el centro de la escena política. La “gente decente” en una sociedad acostumbrada a un orden vertical se horrorizó frente a esa emergencia del pueblo llano. Desde entonces, nuestras clases cultas y no tan cultas pusieron el grito en el cielo: los caudillos del siglo pasado habían vuelto a disputarles el poder. El mundo derecho se había convertido en un mundo al revés: “incultos personajillos” le prometían el poder al despreciable vulgo dejándolos a ellos al margen de las decisiones.<sup>39</sup>

Sirva este preámbulo para señalar que el populismo fue el inicio de un proceso (que está muy lejos de haber concluido) orientado a acabar con el “Estado oligárquico” en América Latina. Vino a revertir la idea de un orden social dirigido esencialmente de arriba hacia abajo en el que, hasta entonces, la política era un ámbito dominado por muy pocos.<sup>40</sup> Con todo, hay que decir que, a diferencia de la caricatura que suele presentarse hoy, los líderes populistas de entonces no eran sólo unos vociferantes que arengaban a las multitudes en público. Antes que eso, eran hábiles políticos, hombres pragmáticos que supieron negociar con la nueva clase industrial a favor de grandes proyectos de desarrollo nacional, como no supo hacerlo la vieja clase política.<sup>41</sup>

### ***Un populismo de baja intensidad***

Es innegable que hay elementos del liderazgo de López Obrador que coinciden con rasgos comúnmente asociados a gobiernos populistas en la región, como son la presencia de un liderazgo fuerte y personalista que suscita el apoyo de un colectivo de individuos movilizados, casi siempre activamente y en el espacio público (cosa que no se ve tanto con este gobierno, como explico más adelante) y, no menos importante, la existencia de un gobierno antagonista que divide el campo político entre un “nosotros” popular y un “ellos” (la élite).<sup>42</sup>

Los líderes populistas, como explica Nicolás Casullo, deben mantener vivo el apoyo popular porque de eso depende su poder y su liderazgo. Por ello, muy a menudo pronuncian discursos en manifestaciones o incluso tienen sus propios programas en radio o televisión, como son los casos de *Aló Presidente* de Hugo Chávez, *Café com o Presidente* de Lula da Silva, *Conversando con Correa* de Rafael Correa, *Habla el Presidente* de José Mujica, los distintos programas de radio que ha tenido Evo Morales e incluso de la mañanera de López Obrador, un ejercicio que a pesar de estar organizado en el formato de una conferencia de prensa, es también una suerte de *reality show* político a través del cual el presidente le habla directamente al pueblo, evitando la intermediación de los medios de comunicación.

Otra característica común a varios líderes populistas, como observa María Esperanza Casullo, es el hábito de contar historias, a través de las cuales se reafirma una narrativa y se refuerza el vínculo entre el líder y su pueblo. Por medio de esas historias es como el líder le explica al pueblo “*quién lo ha dañado y qué debe hacer para alcanzar la redención*”.<sup>43</sup> Un líder populista se diferencia de uno no populista, explica esta autora, por la constante referencia a su historia personal y privada. En ese sentido, es común ver cómo este tipo de figuras continuamente hablan de sí mismas: de su infancia, sus valores y forma de pensar y actuar, de una manera en la que “entretejen lo público, lo privado y lo biográfico de una y mil maneras”.<sup>44</sup> Tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff, por ejemplo, siempre apelaban a su vida como militantes durante la dictadura; la narrativa de Evo Morales, de igual forma, ha sido predominantemente vivencial. Lo mismo Hugo Chávez, quien comúnmente

contaba anécdotas en un tono coloquial, mezclando experiencias personales con chistes y reflexiones.<sup>45</sup> Basta ver la cantidad de referencias históricas y anécdotas personales a las que AMLO recurre todas las mañanas para corroborar esta similitud entre líderes populistas, detrás de cuyas alocuciones se busca explicar a sus seguidores quién es el “ellos” y quién el “nosotros”. Lo que hacen con sus palabras, entonces, es traducir situaciones objetivas complejas en narrativas simplificadas y forjar lazos de solidaridad entre grupos sociales diversos.<sup>46</sup>

En un interesante artículo periodístico titulado “Andrés Manuel es un populista y eso está bien”, Gibrán Ramírez argumentaba que si López Obrador había ganado con más de 30 puntos de ventaja fue precisamente por haber recurrido a un discurso típicamente populista: por haber polarizado, por haber nombrado a los autores de los agravios y por haber logrado dividir a la sociedad, sin dejar otra opción que estar en el bando del cambio o de la continuidad, haciendo que militar en este último se convirtiera en una “fuente de vergüenza hasta para los intelectuales del régimen y los oligarcas”. En aquel texto, Ramírez defendía enérgicamente el uso de la etiqueta “populista”, precisamente por su capacidad para encauzar “los agravios sintetizados en el cambio de época”.<sup>47</sup>

Cuando revisamos las características de los presidentes de la llamada “ola rosa” del populismo latinoamericano, esa que gobernó entre 1998 y 2012, encontramos rasgos que guardan una similitud con López Obrador, aunque también importantes diferencias.<sup>48</sup> El gobierno obradorista coincide con esos presidentes parcialmente en la búsqueda de ampliar la intervención del Estado en la economía, aunque López Obrador sólo lo ha hecho en el ámbito energético. Se asemeja también a esos gobiernos en la adopción de políticas redistributivas del ingreso, a pesar de que éstas parecen ser de corte más moderado al circunscribirse sólo al instrumento de los programas sociales, cuyos efectos probablemente serán muy limitados dada la recesión y la crisis generada por el COVID-19. Y se asemeja también en la expansión de derechos políticos y sociales, como puede ser el derecho a la consulta y la reforma al artículo 4º constitucional, a través del cual se consideran los programas sociales como derechos.

La 4T, sin embargo, se distancia de aquellos gobiernos en una serie



de características que lo hacen parecer un populismo de “baja intensidad”. A diferencia de líderes como Chávez, Correa o Morales, la construcción discursiva de nuestro presidente es más plural que la de aquellos líderes, y su discurso adoptó un tono mucho más moderado, especialmente a partir de la elección de 2018, cuando moderó su retórica desplazando el énfasis de la crítica al neoliberalismo, que lo caracterizó en años previos, hacia la lucha contra la corrupción.<sup>49</sup>

En esa tesitura, AMLO está muy lejos de haber antagonizado con Estados Unidos, como lo han hecho varios líderes populistas sudamericanos. Muy por el contrario, ha cultivado una relación muy cercana, al punto de agradecerle a Donald Trump, contra toda evidencia, el tratar a México con “gentileza y respeto” y haber “honrado nuestra tradición de nación independiente”.<sup>50</sup> Tampoco ha rivalizado con los organismos internacionales de crédito más allá de una que otra crítica aislada a organismos como el FMI, ni ha convocado a congresos constituyentes como en Bolivia, Venezuela o Ecuador. El populismo de baja intensidad de López Obrador está marcado, sobre todo, por la distancia frente al tipo de confrontación que líderes como Chávez, Morales y Correa entablaron con las élites financieras, empresariales o agrícolas. Salvo ciertos actores muy específicos del poder económico con los que este presidente ha antagonizado frecuentemente —Gustavo de Hoyos, Claudio X. González, *Reforma* o *El Universal*, por ejemplo—, está lejos de haber empleado el tipo de lenguaje con el cual el chavismo o el correísmo denostaron a los grupos empresariales. De hecho, AMLO antagoniza mucho más con los corruptos del pasado que con el poder económico.

Hay además otras diferencias. Illades resalta una de ellas cuando afirma que, a diferencia de líderes como Chávez o Morales, López Orador no confiere el mismo tipo de protagonismo a las clases populares ni promueve lo que llama “la movilización permanente de las masas”.<sup>51</sup> El investigador considera incluso paradójico que el presidente, a pesar de tener en el pueblo un importante referente discursivo y empírico, tienda a percibirlo como un actor pasivo, antes que uno con voluntad propia. No es mediante su acción organizada, enfatiza, como ese pueblo obtiene sus reivindicaciones, sino a través de la interlocución con un líder político. Para Illades, aunque el proyecto obradorista tiene la virtud de incorporar a las clases populares que

fueron relegadas por una modernización neoliberal excluyente, como ocurriría con otros populismos de izquierda, la integración de las masas parece seguir la misma lógica de subordinación del régimen de la Revolución mexicana, aunque con una interlocución más directa con ellas. En ese sentido, el autor plantea que López Obrador se asume como un “delegado del pueblo, como el hombre común a quien le corresponde hablar en nombre de todos porque, precisamente por ser común, es uno más, pero uno entre muchos idénticos a él”.